

América Latina erupciona: Perú gira al populismo

PAULA MUÑOZ

<p.munozchirinos@up.edu.pe>

Universidad del Pacífico

Perú

ORCID: 0000-0002-7743-8663

[Resumen] En las elecciones presidenciales de Perú de 2021, votantes insatisfechos y descontentos apoyaron al *outsider* antisistema Pedro Castillo y a Keiko Fujimori. Las elecciones de 2021 reflejan la persistencia de tendencias que durante mucho tiempo han caracterizado al sistema político de Perú, sobre todo la extrema debilidad de los partidos políticos del país. A estas tendencias se sumó una crisis compleja de dimensiones políticas, económicas y de salud pública, aumentando aún más el descontento de la ciudadanía, la fragmentación política y la prominencia de las brechas regionales y socioeconómicas preexistentes. Todo esto llevó a las y los votantes a considerar opciones más radicales en las urnas; a esto le siguió una segunda vuelta entre candidaturas de dudosas credenciales democráticas que polarizó profundamente a la sociedad. En medio de la polarización y las acusaciones infundadas de fraude por parte del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, las perspectivas para la democracia en Perú parecen sombrías.

[Palabras clave] Perú, elecciones, crisis, populismo, polarización.

[Title] Latin America Erupts: Peru Goes Populist

[Abstract] Peru's 2021 presidential election saw disaffected and discontented voters throwing their support behind antisystem outsider Pedro Castillo and Keiko Fujimori. The 2021 election reflects the persistence of trends that have long characterized Peru's political system, most notably the extreme weakness of the country's political parties. To these trends were added a compound crisis comprising political, economic, and public-health dimensions that further increased citizen disaffection, political fragmentation, and the salience of preexisting regional and socioeconomic divides. All this led voters to consider more radical options at the ballot box; a runoff between candidates with dubious democratic credentials that deeply polarized society followed. Amid polarization and unfounded allegations of fraud by Keiko Fujimori's Fuerza Popular, prospects for Peru's democracy look bleak.

[Keywords] Peru, elections, crises, populism, polarization.

MUÑOZ, Paula. "Latin America Erupts: Peru Goes Populist_." *Journal of Democracy* 32:3 (2021), 48-62. © 2021 National Endowment for Democracy and the Johns Hopkins University Press. Reprinted with permission of Johns Hopkins University Press.

DOI:10.53557/Elecciones.2021.v20n22.08

Al momento de escribir este artículo, el 16 de junio de 2021, parece que las y los votantes peruanos han elegido a Pedro Castillo como su nuevo presidente en lugar de Keiko Fujimori. La segunda vuelta del 6 de junio fue tan ajustada que Castillo la ganó con solo el 50,13% o cerca de 44.000 votos de los más de 18,5 millones emitidos en esta nación de 33 millones.

Este veredicto tan estrecho se produjo después de un periodo de tres años en el que Perú tuvo tres presidentes, ninguno de ellos electo. La segunda vuelta conto con la participación de 74,6% de votantes habilitados. El resultado de este proceso dio cierre a la era más turbulenta en la historia política peruana desde la restauración de la democracia luego de que el autoritario presidente Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, huyera del país y renunciara en noviembre de 2000.

Perú está entrando ahora en un periodo de gran incertidumbre a medida que se producen alegaciones de fraude electoral y la polarización política va de mal en peor. La legitimidad del gobierno recién elegido se ha visto dañada y las perspectivas de superar la reciente crisis política parecen sombrías. La democracia podría sufrir un descarrilamiento por parte de fuerzas autoritarias, en el peor de los casos, e incluso en el mejor de los casos tendrá que soportar mayor inestabilidad y la pérdida de aún más legitimidad a los ojos de la ciudadanía.

La segunda vuelta de junio se produjo después de las elecciones generales del 11 de abril para reemplazar al gobierno de transición que se había formado el 17 de noviembre de 2020, luego de que una crisis política hiciera que la presidencia cambiara de manos dos veces en una sola semana. Abril de 2021 era el mes previsto para esta elección. La crisis había comenzado con la decisión del Congreso de derrocar al presidente Martín Vizcarra cinco meses antes de las elecciones.¹ Las protestas que estallaron en muchos lugares a la vez, algo que no se ve a menudo en Perú, rechazaron al “Congreso usurpador” y exigieron que el nuevo presidente, Manuel Merino, dimitiera. A la cabeza de las manifestaciones sobresalieron las y los jóvenes peruanos, un grupo que no era conocido previamente por su movilización política. Como las protestas y la represión policial en respuesta a estos se habían vuelto virales en las redes sociales, Merino

1 El propio Vizcarra no había sido elegido presidente. Había sido electo para la primera vicepresidencia en 2016 y había accedido a la presidencia cuando Pedro Pablo Kuczynski, que enfrentaba un juicio político, renunció en marzo de 2018.

(quien había estado en la fila para la presidencia nacional en virtud de su cargo como presidente del Congreso) tuvo que renunciar. Para ocupar su lugar, el Congreso eligió a uno de sus miembros, el centrista Francisco Sagasti, para encabezar una administración de transición. Así, se escribió otro capítulo del prolongado conflicto institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno peruano.

Este preocupante episodio, durante el cual la policía mató a dos jóvenes manifestantes e hirió a cientos más, fue el prefacio de la campaña electoral de 2021 marcada por la apatía generalizada de la ciudadanía, la fragmentación electoral y una enorme incertidumbre. Si bien las campañas electorales peruanas en la década de 2000 habían sido notorias por su inestabilidad, imprevisibilidad y alta fragmentación, esta elección superó todos los precedentes en ese sentido. Con diecinueve candidatas y candidatos compitiendo por la presidencia, las encuestas de opinión realizadas hasta una semana antes de la votación mostraron un empate estadístico entre cinco candidaturas que dividieron aproximadamente la mitad de los votos, mientras que cerca de un tercio de las y los encuestados manifestaron que estaban indecisos o planeaban emitir un voto nulo o voto en blanco. La conmoción fue generalizada cuando se contaron los votos del 11 de abril y un candidato de izquierda radical, Pedro Castillo, del partido Perú Libre (PL), ocupó el primer lugar con un 18,9%. La proporción de las y los encuestados que indicaron a las encuestadoras que tenían la intención de votar por este candidato había comenzado a aumentar tardíamente —solo una semana antes de las elecciones Castillo había estado en el sexto lugar con un 6,5%—, aumentando de manera constante en los últimos días de la campaña.

Maestro, líder sindical y rondero (miliciano de defensa local rural) de la sierra del norte, Castillo se hizo conocido a nivel nacional por liderar una huelga de maestros de varios meses en el 2017 durante la cual rechazó la autoridad del sindicato nacional de maestros. El autodenominado marxista, Castillo, prometió cambiar el modelo neoliberal por una “economía popular de mercado”, nacionalizando sectores estratégicos como la minería, revisando los contratos públicos firmados y priorizando el apoyo a la demanda interna.

Inspirándose en los ejemplos populistas de Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador, Castillo también prometió cambiar la Constitución de

1993, para lo cual convocó la elección de una asamblea nacional. Además, se comprometió con desactivar instituciones constitucionalmente autónomas como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, al tiempo que “corregiría” las acciones de las agencias reguladoras como las encargadas de supervisar el transporte y la educación superior. Esta intención declarada de interferir con los órganos independientes de rendición de cuentas horizontal deja en claro la falta de credenciales democráticas liberales de Castillo.

Como candidata de su partido Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori terminó la primera ronda en segundo lugar con un 13,4%, seguida de cerca por el conservador radical Rafael López Aliaga con un 11,8%. En esta, su tercera candidatura a la presidencia de Perú, Fujimori hizo campaña con un discurso más autoritario y conservador, y prometió usar mano dura contra el crimen y el desorden, destacó los logros del gobierno autoritario de su padre y admitió abiertamente que usaría sus poderes presidenciales para indultarlo. Habló de los actos de corrupción y abusos a los derechos de su padre, delitos por los que ha sido debidamente condenado por los tribunales peruanos, como meros “errores”.

¿Cómo terminó un país que a fines de 2020 presenció movilizaciones masivas imprevistas en apoyo de la democracia para solo unos meses después realizar una elección de segunda vuelta presidencial entre dos candidaturas de dudosas credenciales democráticas? ¿Cómo logró un candidato, que nunca ha ocupado un cargo electo, que proviene de una provincia periférica y que se postuló en una plataforma de izquierda radical, ganar la presidencia en un Perú supuestamente conservador y orientado al *statu quo*? Y, ¿cuál es el panorama de la democracia peruana en los próximos años?

En general, las elecciones de 2021 reflejan la persistencia de importantes tendencias que han caracterizado al sistema político peruano desde hace algún tiempo. Estas tendencias incluyen la extrema debilidad de los partidos políticos existentes y la consecuente fragmentación del sistema de partidos, así como los hábitos de improvisación que han desarrollado los actores políticos en un contexto de preferencias políticas inestables y lealtades partidistas débiles. Junto a estas tendencias debe también considerarse el surgimiento esporádico de brechas socioeconómicas y territoriales superpuestas que enfrentan a Lima y las regiones costeras, más integradas a la economía exportadora, con las áreas periféricas menos integradas del país.

Castillo es el candidato de esas zonas periféricas, pero por sí solas no fueron suficientes para hacerlo presidente. Debe entenderse que la campaña de 2021 se desarrolló en medio de una aguda crisis socioeconómica que cambió las prioridades de un grupo de la ciudadanía previamente mejor incorporado económicamente y, solo después de años de inestabilidad político-institucional que reconfiguraron el sistema político. Dentro de este nuevo escenario, la desafección y el descontento de las y los ciudadanos jugaron un papel importante en impulsar las preferencias electorales, dando nuevamente relevancia a las divisiones regionales y socioeconómicas que habían sido evidentes en los resultados de las elecciones de 2006 antes de ser oscurecidas por el crecimiento económico. El sistema de partidos fragmentado, mientras tanto, ayudó a las opciones más radicales y resonantes a ganar vida.

1. MALA SANGRE Y ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

Desde 2015, las y los peruanos han visto intensificarse las luchas de poder entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno bajo la influencia de eventos externos que “impactan al sistema”. El primero de ellos fue el extenso escándalo de corrupción internacional que surgió de las investigaciones de Lava Jato de Brasil y las investigaciones posteriores sobre los sobornos pagados por Odebrecht, el gigante conglomerado brasileño de construcción. El segundo y más reciente evento fue la pandemia de la COVID-19.

En 2011, Ollanta Humala, un anterior candidato populista de izquierda de la “periferia” de Perú, había derrotado por estrecho margen a Keiko Fujimori en una segunda vuelta para la presidencia. Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, conservó un bloque significativo de escaños en el Congreso unicameral de 130 miembros, sin embargo, comenzó a buscar esgrimir mecanismos poco utilizados para ejercer control legislativo sobre otras ramas del gobierno (MUÑOZ Y GUIBERT 2016).

Cinco años después, el uso politizado de los mecanismos de control horizontal se intensificó después de que Fuerza Popular obtuviera 73 escaños en el Congreso mientras Keiko Fujimori sufría otra derrota presidencial por un estrecho margen, esta vez ante el neoliberal Pedro Pablo Kuczynski (DARGENT Y MUÑOZ 2016). Desde el principio, Fuerza Popular se erigió como una fuerza confrontacional e incluso obstruccionista. Este partido utilizó su mayoría para

censurar al ministro de Educación. Luego, en 2017, Fuerza Popular negó el voto de confianza primero al ministro de Economía y Finanzas, y luego a todo el gabinete. Nadie había previsto cuán implacablemente virulentos serían los fujimoristas del Congreso o cuán poco les importaría el rechazo público (VERGARA 2018). Reglas institucionales inactivas y vagas se convirtieron en armas cuando la nueva administración y su oposición se enfrentaron en un juego de “hardball constitucional” (LEVITSKY Y ZIBLATT 2018) que puso a prueba las instituciones de la democracia peruana hasta sus límites (PAREDES Y ENCINAS 2020).

A primera vista, la dureza de la lucha parecía sorprendente, dado que Kuczynski era también de derecha y había apoyado a Fujimori sobre Humala en 2011. Sin embargo, el presidente neoliberal y tecnocrático se encontraba en el lado opuesto de una división que lo separaba del movimiento conservador populista representado por Fuerza Popular (MELÉNDEZ 2019A). Además, si bien Fuerza Popular había logrado lo que parecía (según los estándares del débil sistema de partidos de Perú) ser un progreso impresionante en la construcción de partidos (LEVITSKY Y ZAVALETA 2016), todavía no se había vuelto lo suficientemente coherente e institucionalizado como para contar con horizontes de largo plazo al tomar decisiones (VERGARA 2018). A partir de 2016, Fuerza Popular aún incluía como candidatas y candidatos a una serie de independientes, cada uno con una agenda individual y un conjunto de intereses, cuyas acciones eran difíciles de predecir para los líderes del partido, y mucho menos de controlar.

Lo que hizo que el “hardball” entre el Legislativo y el Ejecutivo fuera aún más difícil fue el *shock* exógeno, que llegó solo seis meses después de la toma de posesión de Kuczynski en julio de 2016, del escándalo Lava Jato-Odebrecht. En diciembre de 2016, funcionarios de Odebrecht llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que la empresa admitió que había ofrecido comisiones ilícitas a funcionarios públicos en doce países como parte de un plan para ganar grandes contratos en infraestructura. Las y los fiscales peruanos iniciaron inmediatamente investigaciones basadas en estas admisiones que estaban sacudiendo el *establishment* de América Latina desde la República Dominicana y México hasta Chile y Argentina (GONZÁLEZ-OCANTOS 2021).

Los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo-Legislativo rápidamente se entrelazaron con las acusaciones de corrupción, que se estaban haciendo contra los políticos tanto dentro como fuera del poder y en todas las ramas del gobierno. Al principio, cuando las sospechas parecían centrarse principalmente en los expresidentes Humala y Alejandro Toledo (2001-2006), las y los fujimoristas y otros en el Congreso vieron la oportunidad de desacreditar a estos rivales mientras protegían a sus propios líderes. Curiosamente, sin embargo, estos esfuerzos fueron contraproducentes (GONZÁLEZ-OCANTOS 2021). Las y los legisladores nunca pudieron controlar el grupo de trabajo judicial a cargo del caso, en parte porque algunos de sus aliados en el Poder Judicial se vieron implicados en otro escándalo de corrupción nacional conocido como el caso de los Cuellos Blancos. Sin escudos políticos que las obstaculizaran, las investigaciones de Odebrecht terminaron implicando al expresidente Alan García (1985-90, 2006-11), quien se suicidó en abril de 2019 cuando un juez ordenó su detención. Keiko Fujimori fue puesta bajo arresto preventivo en octubre de 2018 y no obtuvo la libertad bajo fianza hasta mayo de 2020, después de la pandemia. Con ella en prisión, FP y los fujimoristas perdieron parte de su influencia en el Congreso y también en el ámbito judicial (PONCE DE LEÓN Y GARCÍA AYALA 2019).

El caso Odebrecht eventualmente llegó a implicar también a Kuczynski, lo que le dio al Congreso una excusa para acusarlo y finalmente condujo a su renuncia en marzo de 2018, después de menos de dos años como presidente.² Al asumir la presidencia desde el cargo de primer vicepresidente, Vizcarra se centró en la anticorrupción como medida para ayudarlo a enfrentarse al Congreso y obtener apoyo público para sí mismo como presidente reformista. En diciembre de 2018, obtuvo la abrumadora aprobación de las y los votantes en un referéndum constitucional para reformar el órgano de gobierno del Poder Judicial Nacional, prohibir que los partidos utilicen fondos privados para comprar publicidad política durante las campañas (solo se permite la financiación pública) y prohibir la reelección consecutiva de los miembros del Congreso.

El éxito del referéndum aumentó la popularidad de Vizcarra y asestó un duro golpe a la legislatura obstruccionista. Sin embargo, la contienda entre

2 Para información detallada sobre este convulsionado episodio, refiérase a Vergara (2018) y Ponce de León y García Ayala (2019).

ambos poderes no terminó ahí. En 2019, Vizcarra creó una comisión de expertas y expertos para recomendar nuevas reformas políticas. Una mayoría del Congreso se resistió a aprobar los proyectos de ley que el Ejecutivo presentó de acuerdo con la mayor parte de las recomendaciones de esta comisión, agudizando las tensiones entre los poderes aun más. En septiembre de 2019, Vizcarra usó su poder constitucional para disolver el Congreso después de que este último intentó nombrar a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional a pesar de las invocaciones presidenciales para hacer más transparente y responsable el proceso utilizado para seleccionar a aquellos juristas (Vizcarra interpretó esto como una segunda muestra de desconfianza del Congreso durante su gobierno, lo que desencadenó la disolución). Al enviar a casa a la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso, a la espera de nuevas elecciones, Vizcarra privó a Keiko Fujimori de su bastión institucional.

Vizcarra respetó los procedimientos establecidos para manejar la crisis y no concentró el poder, de esa manera aseguró la continuidad de la democracia (PAREDES Y ENCINAS 2020). Este fijó nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 y se apegó a ese calendario. Solo diecinueve de los 130 legisladores “disueltos” se postularon para la reelección, y, de esos, solo dos ganaron, ambos reconocidos opositores de los fujimoristas que habían dominado la legislatura anterior (DARGENT Y ROUSSEAU 2021). En particular, Fuerza Popular sufrió un duro golpe pues sus escaños se desplomaron de 72 a 15. Cinco nuevos partidos obtuvieron representación. Acción Popular (AP), el partido más grande en el nuevo Congreso fracturado, obtuvo solo 25 escaños.

Sin embargo, incluso con la desaparición de la mayoría fujimorista persistió el enfrentamiento entre ambos poderes del Estado. Además de estar fragmentado, el Congreso también estaba poblado por políticos de segundo nivel propensos a la influencia de grupos de interés particulares. Vizcarra, que había optado por no presentar una lista en las elecciones, pronto se encontró en nuevos conflictos con una serie de legisladores inexpertos y una serie de intereses privados. Buscando ganar la batalla por la opinión pública mientras la pandemia de la COVID-19 devastaba la economía, el Congreso aprobó varias medidas populistas que invadieron la competencia exclusiva del Ejecutivo para definir iniciativas de gasto. Dado que el nuevo Congreso había sido elegido para terminar con el mandato de cinco años de su predecesor disuelto y que la

Constitución prohíbe disolver el Legislativo en el último año de su mandato, el arma que Vizcarra había utilizado en 2019 estaba fuera de su alcance. La enva-lentonada legislatura lo desafió una y otra vez (DARGENT Y ROUSSEAU 2021).

En noviembre de 2020, en medio de la escalada del conflicto institucional, nuevas filtraciones a la prensa de las investigaciones de Odebrecht insinuaban un acuerdo con el fiscal que exponía a Vizcarra por haber aceptado sobornos cuando fue gobernador en el sur de Perú de 2011 a 2014 (ROMERO 2020). Aunque el presidente mantuvo un apoyo mayoritario en las encuestas de opinión, una supermayoría de 105 miembros del Congreso lo derrocó el 9 de noviembre al declarar vacante la presidencia debido a la “incapacidad moral permanente” del titular. El presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió el cargo de presidente interino, pero las protestas masivas en todo el país lo obligaron a renunciar después de solo cinco días. Luego, el Congreso eligió entre sus filas a un nuevo presidente de transición (Sagasti) que no había votado a favor de la destitución de Vizcarra.

Durante esta crisis político-institucional se incubaron dos cambios importantes que arrojan luz sobre las elecciones de 2021 y otros dos que son relevantes para evaluar las perspectivas de la democracia en Perú. En primer lugar, la ciudadanía se había alejado aún más del sistema político al ver cómo progresaba el choque de poderes en medio de escándalos de corrupción y una grave crisis de la economía y la salud pública. En segundo lugar, esta ciudadanía alienada se siente incluso menos inclinada que antes a votar por las y los candidatos del *establishment*, lo que amplía aún más la brecha de representación. En tercer lugar, el nuevo periodo presidencial comienza con el Congreso que, a pesar de su legitimidad perdida, es más fuerte que antes en relación con el Poder Ejecutivo (PAREDES Y ENCINAS 2020; DARGENT Y ROUSSEAU 2021). Finalmente, los episodios de conflicto institucional, sin mencionar la división de la derecha entre fujimoristas y no fujimoristas, debilitaron lo que había sido una fuerte coalición de tecnócratas y élites económicas alineadas detrás de un consenso neoliberal. Incluso, antes de la segunda vuelta de junio, una mayoría en el Congreso ya había comenzado a desafiar ciertos fundamentos institucionales del régimen neoliberal que ha sido, desde la década de 1990, la principal fuente de continuidad en un sistema político que de otra manera sería inestable (VERGARA Y ENCINAS 2016).

2. LA PRIMERA VUELTA: (MÁS) FRAGMENTACIÓN

Las y los peruanos de todo el país y de todas las condiciones sociales estuvieron pendientes de cada giro de los enrevesados y caóticos eventos de noviembre de 2020, pero una vez que las diecinueve candidaturas presidenciales y veinte listas del Congreso comenzaron a presentarse oficialmente en diciembre, el interés público se desvaneció. La carrera electoral se desarrolló en una nube de indiferencia cívica. La campaña siguió adelante, pero muchas y muchos votantes permanecieron desconectados y no eligieron un candidato para respaldar. A fines de marzo de 2021, un récord del 30% sostuvo que seguía indeciso o planeaba emitir votos nulos o en blanco.

A muchos votantes simplemente no les gustó nada de lo que se ofrecía. Apenas una semana antes de la votación del 11 de abril, las encuestas mostraron cinco candidaturas en un empate estadístico por el primer lugar (algunas de estas personas variaba de una encuesta a otra). La candidatura de Castillo había comenzado a ganar terreno, pero parecía estar detrás del grupo superior, con alrededor del 6,5% de probables votantes como respaldo electoral.

La última semana de campaña fue insoportable. La ley peruana prohíbe la publicación de encuestas preelectorales. Las encuestas circularon a través de canales privados a los que solo tenían acceso las y los mejor conectados. Estas encuestas sugerían que Keiko Fujimori y el economista y autor Hernando de Soto eran los favoritos, pero captaron también destellos de Castillo que se adelantaba rápidamente a la izquierda cuando ganó casi el 13% en un simulacro de votación el 10 de abril. La mayor parte del país, que no está al tanto de las encuestas privadas, se sorprendió por el total obtenido por Castillo en la primera vuelta dado que consiguió casi el 19% de los votos válidos. Al día siguiente, a medida que avanzaba el conteo electoral oficial, los resultados confirmaron que Fujimori —una persona a quien el 70% de votantes, según indicaron a mediados de marzo a los encuestadores, nunca apoyarían— se dirigía a su tercera segunda vuelta presidencial desde 2011.³

¿Qué puede explicar por qué esta primera vuelta, en gran parte aburrida, terminó con un final tan impactante? Para empezar, la primera vuelta confirmó

3 Para mayor información revise https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-03/situacion_%20politica.pdf

que la desafección ciudadana, ya alta para los estándares regionales (CARRIÓN *ET AL.* 2018), había alcanzado el nivel más alto visto desde la transición democrática de 2000. Después de cinco años de escándalos de corrupción y enfrentamientos políticos, ninguna candidatura pudo provocar el tipo de apoyo que alguna vez fue una característica de la política peruana. Las y los peruanos evitaron aún más a los políticos y sus partidos. En este sentido, el estatus de Castillo como un recién llegado cuya candidatura cobró impulso al final de la carrera probablemente lo ayudó. Sin embargo, incluso él recibió una porción de la votación en la primera vuelta considerablemente menor (24,3%) que la recibida por quién ocupó el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2001. En las elecciones presidenciales desde el 2001 hasta la de 2016, las tres principales candidaturas de la primera ronda obtuvieron un porcentaje de votos válidos total que promedió un poco menos del 80% de todos los votos válidos emitidos. En 2021, los tres primeros puestos juntos obtuvieron solo el 45%.

Junto con la desafección, la fragmentación partidista extrema contribuyó a la escala de la desconexión ciudadana respecto a la campaña electoral. En ausencia de partidos organizados, ni conservadores ni izquierdistas ni centristas pudieron coordinar. Esta incapacidad para coordinar fue particularmente notable en la derecha que dividió su apoyo en seis candidaturas que juntas sumaron alrededor del 45% de los votos válidos. Esto es sorprendente considerando que la división de la derecha en las elecciones de 2016 fue en parte responsable del drama político que vino después. Sin partidos que alargaran sus horizontes temporales, la derecha no pudo proteger sus propios intereses.

Esta mayor fragmentación de la derecha se produjo después de cinco años durante los cuales las cuestiones sociales, incluida la igualdad de género y los derechos LGBTQ, se habían convertido en temas de controversia acalorada e incluso duras disputas. Tras el castigo electoral de 2020 al fujimorismo por iniciar y escalar la crisis institucional, apareció una alternativa conservadora en la forma del candidato de extrema derecha Rafael López Aliaga. Este terminó tercero el 11 de abril con un 11,8%, unos cientos de miles de votos detrás de Fujimori. Castillo y Yonhy Lescano de Acción Popular (9%) pueden ser radicales y progresistas en política económica, pero comparten una postura profundamente conservadora en temas sociales.

Irónicamente, las divisiones de la derecha ayudaron al fujimorismo a llegar a la segunda vuelta. A diferencia de otras opciones políticas menos arraigadas, el fujimorismo tiene un bastión de leales partidarias y partidarios que impulsaron la candidatura de Keiko Fujimori a lo largo de la contienda. Probablemente, Fujimori consiguió convencer a algunas y algunos votantes de derecha que habían estado considerando a López Aliaga o incluso a De Soto (7,5%), pero que se habían sentido desanimados a votar por estos debido a sus actuaciones mediocres en los debates. Fujimori también pudo haber ganado los votos de algunos que la veían como el baluarte más fuerte contra lo que consideraban la amenaza de que Castillo se convirtiera en presidente.

Por último, las restricciones a las campañas electorales relacionadas con la pandemia también fueron importantes. En Perú, a diferencia de los anuncios políticos o las redes sociales, los mítines y otros eventos de campaña permiten a las y los candidatos conectarse personalmente con sus votantes y persuadirlos de manera más efectiva (MUÑOZ 2019). Este también pareció ser el caso en esta elección. Los dos candidatos que mostraron menos respeto por las restricciones de reunión pública, Castillo y López Aliaga, fueron los que más subieron en las encuestas hacia el cierre de la campaña electoral.

Las protestas de noviembre de 2020, contra la asunción de Merino a la presidencia interina, no terminaron siendo decisivas para la carrera. Estas protestas ocurrieron cuando la elección ya había sido convocada y sus reglas establecidas, sin dejar espacio para que nuevos actores pasaran a formar parte de ella. En segundo lugar, a pesar de las altas expectativas de la nueva generación que se había levantado durante las protestas, lo cierto es que las movilizaciones habían sido más reactivas que proactivas, con participantes sin experiencia que se sumaban espontáneamente por rabia y coordinaban solo a través de las redes sociales. En tercer lugar, y más importante, las y los candidatos que no habían estado involucrados en la destitución de Vizcarra y que, por lo tanto, podrían haberla capitalizado convirtiéndola en una cuestión de agenda, de hecho, optaron por no centrar sus campañas en ello. Por impopular que haya sido el acceso de Merino a la presidencia, el panorama de los partidos está tan fracturado que los que respaldaron la expulsión de Vizcarra no necesariamente sufrieron en las urnas por haber adoptado esa postura. Las y los fujimoristas, las y los opositores más vociferantes de Vizcarra, sumaron nueve escaños en las

elecciones y ahora tienen un total de dos docenas de escaños, lo que convierte a Fuerza Popular en el segundo partido individual más grande del Congreso. Su bloque es superado en tamaño solo por los 37 escaños que el partido de Castillo, Perú Libre, obtuvo en esta, su primera elección.

3. HACIA LA SEGUNDA VUELTA

Si bien la desorganización partidista es importante, el “elefante en la sala” es obviamente la crisis agravada que ha estado sufriendo Perú y que ha hecho que muchos votantes estén dispuestos a correr riesgos con la esperanza de cambiar una situación que los ha estado afectando personalmente y de manera nefasta (WEYLAND 2004). En este sentido, las elecciones de 2021 se asemejan a las elecciones de 1990, cuando un Perú azotado por la hiperinflación y la violencia maoísta de la insurgencia de Sendero Luminoso había optado por un clásico candidato forastero llamado Alberto Fujimori, entonces un ingeniero agrícola poco conocido (CAMERON 1994).

El impacto de la pandemia de la COVID-19 en la sociedad peruana ha sido nada menos que traumático. Perú ha experimentado una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por la enfermedad y, de hecho, ha sufrido la mayor cantidad de muertes por cada mil personas de cualquier país de América Latina. La elección coincidió con el inicio de una segunda ola de la COVID, que se incrementó en Perú durante abril de 2021. Las caídas en el producto bruto interno y el empleo relacionadas con la COVID que ha experimentado Perú se encuentran entre las más pronunciadas del mundo; el país tiene ahora la tasa de pobreza más pronunciada de la región (VIALE 2020). Después de años de un crecimiento económico razonablemente positivo, cada día más peruanos y peruanas descubren que deben aunar recursos solo para asegurarse sus alimentos.

Como era de esperar, entonces, detrás de las preferencias electorales cambiantes, y especialmente de una nueva voluntad de arriesgarse con un extraño como Castillo, se esconde un descontento profundo y creciente. El crecimiento económico que había oscurecido las divisiones socioeconómicas y territoriales después de las elecciones de 2006 se había tambaleado,⁴ lo cual dejó estas

⁴ Las elecciones de 2006 también se caracterizaron por una profunda división socioeconómica y territorial. En esa contienda, un candidato nacionalista y de izquierda radical (Humala) fue derrotado por un candidato que prometía un cambio responsable consistente con el neoliberalismo (García). Para más información, revise McClintock (2006).

divisiones claramente expuestas una vez más (MUÑOZ 2021). Votantes desencantados y desapegados buscaron entre las y los candidatos de centro-izquierda al generador de cambio más probable, y se decidieron a finales de la carrera electoral por Castillo. De hecho, las encuestas mostraron que una proporción significativa de votantes indecisos hasta las últimas dos semanas de la campaña eran peruanos que estaban más abajo en la escala del estatus socioeconómico y los menos interesados en la política. Estas y estos votantes llevaron a Castillo primero a la segunda vuelta y luego a una victoria electoral.

En medio de la compleja crisis de las instituciones, de la COVID y de lo que la cuarentena y otras medidas para prevenir esta enfermedad le ha generado a la economía peruana dependiente de las exportaciones, las divisiones regionales y de clase socioeconómica se han reafirmado con un cierto matiz de venganza. La división territorial es especialmente marcada. El mapa de los resultados de la segunda vuelta revela al Perú “periférico” que mayoritariamente favorece a Castillo mientras que Lima (en términos demográficos una gran conurbación que alberga alrededor del 30% de la población nacional), cinco distritos electorales costeros y dos en la Amazonía votaron por Fujimori y la defensa del *statu quo* neoliberal. El mapa de la segunda vuelta de 2021 se parece mucho al mapa de 2006 (HIDALGO 2021). Pero mientras que, en 2006, cuando los precios de las materias primas subieron y la economía floreció, una mayoría concentrada en las zonas costeras votó a favor de mantener el *statu quo*, la crisis agravada en la que se encuentra Perú quince años después ha inclinado la balanza a favor del cambio exigido por aquellas personas que viven en el resto del territorio nacional.

Castillo representó al descontento que la crisis agravada ha engendrado al dar voz a un discurso populista que pinta a los ricos desalmados y a la clase política corrupta vinculada al capital como enemigos del pueblo y sus intereses. Prometió convocar una asamblea constituyente “para gestar una Constitución que tenga color, olor y sabor a pueblo” (EL COMERCIO 2021). Incluso amenazó con desactivar las instituciones autónomas que no respeten la voluntad del “pueblo”. Como dijo, si “este Gobierno va al Tribunal Constitucional y este falla en contra del pueblo, vamos a desactivar en el acto el TC y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular, así como todos los jueces y fiscales” (EL COMERCIO 2021). Aunque Castillo luego ofreció garantías de que no desactivaría este tribunal si fuera elegido, las preocupaciones sobre las

credenciales democráticas de Perú Libre crecieron con la publicación de una grabación de audio de 2020 en la que se puede escuchar a un legislador electo por este partido afirmar: “somos socialistas y nuestro camino hacia una nueva constitución es un primer paso. Si tomamos el poder, no lo dejaremos ir. Con todo el respeto que merecen usted y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos y establecer un proceso revolucionario en el Perú” (REDACCIÓN RPP NOTICIAS 2021).

El discurso populista de Castillo fue eficaz para movilizar a los votantes en su mayoría más pobres y rurales, en parte debido a su tendencia a identificarse con sus humildes modales y orígenes personales. Este encarnaba las esperanzas de un cambio que por fin favorecería al “pueblo”. Esta estrategia le permitió consolidar un “piso” sólido de apoyo del 40% durante la segunda vuelta a pesar del carácter descaradamente improvisado de su campaña, su inclinación por la autocontradicción y el desempeño mediocre que él (y su equipo de “expertos”) exhibió en los debates oficiales.⁵ Sin embargo, su estrategia populista no logró ganar suficientes votantes indecisos como para darle algo parecido a una cómoda victoria, y en cambio lo ha dejado (en el mejor de los casos) arrastrándose en el cargo con la más pequeña de las mayorías.

Mientras tanto, Fuerza Popular desplegó una campaña de miedo muy agresiva, y llamó a las y los peruanos a unirse contra la amenaza del “comunismo” y defender la democracia y las libertades individuales, incluida la propiedad privada. Esta retórica nacionalista e incluso macartista estuvo acompañada de varias oleadas de *fake news*. Esta campaña de miedo fue apoyada activamente por hombres de negocios que pagaron por grandes vallas publicitarias iluminadas y otras formas de mensajes que advierten a la gente contra los peligros del comunismo. Con base en esta estrategia de miedo, Keiko Fujimori logró politizar una fractura de clases sociales y congregar a votantes de centroderecha que la veían con escepticismo y habían apoyado a otros candidatos durante la primera vuelta. En las encuestas, el apoyo a Fujimori comenzó a aumentar lenta, pero constantemente, con su mayor respaldo concentrado principalmente en Lima y los sectores socioeconómicos medios y altos. Al darse cuenta de que los

5 El video completo del debate de su equipo de expertos está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kRlcp5SYno&ab_channel=DiarioElComercioVideos

sectores más pobres permanecían impasibles, Fuerza Popular durante las últimas dos semanas de la campaña comenzó a prometer todo tipo de incentivos económicos, incluido un “bono de oxígeno” por valor de unos \$ 2.500 a todas las familias que habían perdido a alguien por culpa de la COVID.

Tanto Castillo como Fujimori optaron por hacer campaña de formas que convirtieron al modelo económico en el centro de un enfrentamiento polarizador que fue retratado como una cuestión de vida o muerte. Ninguno de los candidatos hizo ningún esfuerzo por trasladarse al centro. Tampoco se tomó la agenda democrática y reformista que se había defendido en las calles en noviembre de 2020 lo suficientemente en serio como para ir más allá de meros gestos, como firmar un juramento de apoyo a la democracia que los grupos de la sociedad civil habían redactado y pedido a las candidaturas que respaldaran formalmente (AYMA 2021). Finalmente, esta falta de voluntad compartida para hacer algo más que gestos para moderarse puede haber hecho más daño a Keiko Fujimori —quien, después de todo, es miembro del *establishment* político— que a la candidatura declaradamente *outsider* de Castillo. En una elección tan reñida, un compromiso más creíble con la democracia podría haber influido en un número significativo de antifujimoristas (estar en contra de los Fujimori es una identidad política negativa importante en Perú) (MELÉNDEZ 2019) para dejar de lado sus recelos y votar por ella. En cambio, Fujimori endureció su retórica y trajo de vuelta a la palestra a viejas figuras fujimoristas como parte de su equipo técnico, pasos que pueden haber alejado a suficientes antifujimoristas maleables como para costarle la presidencia por tercera vez en una década (DARGENT Y MUÑOZ 2016; LEVITSKY 2011).

El tramo final de la segunda vuelta estuvo angustiosamente emparejado. El apoyo de Keiko Fujimori siguió aumentando lentamente. Encuestas no publicadas tomadas el día anterior a las elecciones mostraron un empate estadístico con ventaja de Fujimori. Los miembros de las clases altas y fujimoristas que tenían conocimiento de esta información creían que habían ganado la elección. El problema llegó más tarde cuando se cerraron las urnas y el conteo rápido de votos de Ipsos mostró a Castillo como líder de la contienda, lo cual contradijo las encuestas a boca de urna. A medida que pasaban las horas, una competencia al filo de la navaja comenzó a tomar protagonismo, con Castillo a la cabeza, por poco más de un cuarto de punto porcentual.

La élite económica y social entró en pánico. Informes falsos sobre lo que los “comunistas” (Perú Libre es un partido declaradamente marxista-leninista, aunque Castillo dice que no es comunista) harían una vez en el poder, como quitarle las casas a la clase media y prohibir todo tipo de importaciones valiosas, inundó las redes sociales. Esto incluyó noticias falsas sobre supuestas tácticas fraudulentas de PL, así como llamados a las fuerzas armadas para tomar el poder antes de que los “comunistas” pudieran hacerlo (MINISTERIO DE DEFENSA 2021). Fue en este contexto crítico que Keiko Fujimori convocó una conferencia de prensa en la que alegó fraude electoral, y sostuvo que “ha habido una estrategia de Perú Libre para distorsionar o retrasar los resultados que reflejan la voluntad popular”.⁶ Luego Fuerza Popular inició procedimientos para anular el conteo de votos de más de setecientas mesas electorales (cada una con alrededor de doscientos votos) concentradas en áreas de bajos ingresos que apoyaron a Castillo. Pero solo 134 de ellos cumplieron con el plazo legal (RED INVESTIGATIVA REGIONAL 2021), lo que está siendo disputado por los abogados de FP. Esta disputa se prolongó. Ambas partes han realizado mítines y protestas. Aunque hasta ahora estos han sido pacíficos, existe preocupación porque los seguidores de Fuerza Popular han protestado contra algunos funcionarios electorales que se encontraban en sus hogares, lo que claramente es una forma de intimidación (SALAZAR 2021).

Con el 100% de los resultados, Castillo ganó las elecciones por 44.058 votos. Sin embargo, al momento de escribir este artículo (el 16 de junio), las y los peruanos todavía esperaban la confirmación oficial de quién gobernará durante los próximos cinco años. Tendrán que seguir esperando, además, hasta que las autoridades electorales se pronuncien sobre los cientos de recursos que solicitan la nulidad del escrutinio. Mientras tanto, existe la preocupación de que este asunto se salga de control.

4. MÁS PROBLEMAS POR DELANTE

Ahora que la votación ha terminado y el proceso electoral está llegando a su fin, ¿qué sigue? Las perspectivas de la democracia peruana parecen sombrías. El mayor perdedor de las elecciones de 2021 fue el centro reformista y

6 La conferencia completa se encuentra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=782bWeC4otY&ab_channel=ElB%C3%BAhope

democrático. Ese centro ahora está desprovisto de organización social y representación política. Se puede esperar que las tendencias y los grupos de interés no democráticos disfruten de una libertad mucho mayor para hacer valer sus demandas en medio de una intensa polarización. Contener a estos grupos será una lucha cuesta arriba.

Los niveles sin precedentes de solicitudes de anulación de las elecciones significan que la proclamación oficial de resultados aún puede llevar semanas. Mientras tanto, existe un ambiente político tenso y temores de violencia. A la derecha, líderes, élites y candidatos de Fuerza Popular cuestionan las decisiones de las autoridades electorales. Algunos en Fuerza Popular han pedido una nueva elección, mientras que otros, incluso, han dicho que los militares deberían intervenir. A la izquierda, Perú Libre está desplegando una estrategia legal para defender los votos de Castillo, mientras que el propio Castillo permanece mayormente en silencio. Recientemente, Castillo dijo brevemente a la prensa que él y su partido esperan pacientemente la certificación oficial del resultado, pero agregó que “no vamos a permitir que se siga discriminando el voto del pueblo” (VIGURIA 2021).

Incluso si se confirma la victoria de Castillo en la segunda vuelta, la inestabilidad política continua sigue siendo un riesgo grave. Castillo es un *outsider* improvisado con un estilo de liderazgo inestable. Si ganó la elección (lo que parece probable al momento de escribir este artículo), fue más a pesar de sus fallas que debido a sus aciertos. Castillo se presentó como candidato invitado de Perú Libre, que de hecho es el partido socialista registrado de Vladimir Cerrón. Cerrón tuvo que extender esta invitación luego de no lograr sellar una alianza electoral con el partido Nuevo Perú de Verónica Mendoza. Cerrón, un exgobernador regional de Junín que ha sido sentenciado por cargos de corrupción, no pudo postularse debido a su condena legal. Un médico marxista de formación cubana, Cerrón es claramente mucho más radical que Castillo y quedan dudas sobre si podría terminar radicalizando al gobierno electo en virtud de la influencia que puede ejercer como el verdadero jefe del bloque parlamentario de Perú Libre. En cuanto a Castillo, aún tiene que demostrar que posee algún tipo liderazgo significativo en Perú Libre.

El Congreso, aunque fragmentado, sigue siendo potente como institución, y existe el fantasma persistente de la vacancia de Vizcarra sobre la base de una

cláusula de incapacidad moral poco clara. Habiendo expulsado a un presidente de esta manera, ¿considerará el Congreso la idea de darle a otro el mismo trato cuando las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo se vuelvan tensas una vez más, como es probable que suceda? Si bien Castillo puede reunir suficientes votos (si se mantiene su alianza con Cerrón y se pueden obtener algunos votos adicionales de la oposición) para bloquear un procedimiento de vacancia como el que se usó para destituir a Vizcarra, la derecha aún tiene muchos escaños que puede utilizar para desestabilizar al gobierno o para ganar el juego político a medio plazo.

A la posibilidad de éxito de las maniobras del Congreso para declarar la vacancia de la presidencia y la amenaza de tendencias autoritarias que emanan de segmentos de la derecha, se debe agregar el riesgo de que Castillo cumpla sus promesas populistas y use los poderes de la presidencia para esposar o manipular los “balances” institucionales del sistema. ¿Propondrá él, por ejemplo, buscar una asamblea constitucional por medios extrainstitucionales? ¿Podría incluso tratar de cerrar el Congreso, como hizo Vizcarra, por motivos posiblemente dudosos de censura para desencadenar la elección de una legislatura más de su agrado? ¿Podría intentar interferir con el Poder Judicial? Aunque no se pueden descartar las incursiones de Castillo por estas vías autoritarias, sus posibilidades de éxito dependerán más de su capacidad para movilizar un apoyo sostenido en las calles, incluidas las de Lima, una hazaña difícil de lograr en Perú.

Si se intensifican los disturbios civiles y las protestas, como bien podría suceder, ¿cuál será la respuesta de un servicio de policía nacional que aún lucha por recuperar la legitimidad que perdió por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas de noviembre de 2020? Más reacciones policiales exageradas serían un desastre, pero también lo sería una fuerza policial demasiado intimidada y desmoralizada para proteger a ciudadanas y ciudadanos inocentes, mantener el orden básico y dar un paso firme entre las facciones callejeras enojadas antes de que puedan lastimarse entre sí. La crisis institucional entre las y los políticos civiles ya es bastante mala, pero si se extiende hasta succionar los órganos armados de la seguridad nacional —la policía y hasta el ejército—, se verá con pesar que los sucesos en Perú aún tienen más margen para empeorar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayma, Isabel. 2021. “Pedro Castillo y Keiko Fujimori firman la Proclama Ciudadana: ¿En qué consiste y qué impacto tendría?”. *El Comercio*, Mayo 17. <https://elcomercio.pe/elecciones-2021/pedro-castillo-y-keiko-fujimori-firman-la-proclama-ciudadana-en-que-consiste-y-que-impacto-tendria-peru-libre-fuerza-popular-segunda-vuelta-noticia/>
- Cameron, Maxwell A. 1994. *Democracy and Authoritarianism in Peru: Political Coalitions and Social Change*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dargent, Eduardo, y Paula Muñoz. 2016. “Peru: A Close Win for Continuity”. *Journal of Democracy* (27): 145-58. DOI: 10.1353/jod.2016.0070
- Dargent, Eduardo y Stéphanie Rousseau. 2021. “Perú 2020: ¿El quiebre de la continuidad?” *Revista de Ciencia Política*, 41(2): 377-400. DOI: 10.4067/S0718-090X2021005000112
- El Comercio. 2021. “Pedro Castillo: ‘Vamos a desactivar en el acto el TC y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular’”. *El Comercio*, Marzo 15. <https://elcomercio.pe/politica/pedro-castillo-vamos-a-desactivar-en-el-acto-el-tc-y-el-tribunal-siguiente-tiene-que-ser-elegido-por-mandato-popular-nndc-noticia/>
- Hidalgo, Martín. 2021. “Elecciones Perú 2021: así evoluciona el nuevo mapa electoral tras la segunda vuelta | INTERACTIVO”. *El Comercio*, Junio 8. <https://elcomercio.pe/elecciones-2021/elecciones-2021-mira-aqui-como-evolucion-a-el-nuevo-mapa-electoral-tras-la-segunda-vuelta-interactivo-ec-data-regiones-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-fujimori-ipsos-conteo-rapido-flash-electoral-noticia/>
- González-Ocantos, Ezequiel. 2021. “The Criminalization of Corruption in Latin America: Prosecutors, Politicians, and Voters During Lava Jato”. En prensa.
- Levitsky, Steven. 2011. “Peru’s 2011 Elections: A Surprising Left Turn”. *Journal of Democracy*, 22: 84-94. DOI: 10.1353/jod.2011.0064
- Levitsky, Steven, y Mauricio Zavaleta. 2016. “Why No Party-Building in Peru?”. Steven Levitsky et al., eds. *Challenges of Party-Building in Latin America*, 412-439. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781316550564.015
- Levitsky, Steven, y Daniel Ziblatt. 2018. *How Democracies Die*. New York: Crown.
- McClintock, Cynthia. 2006. “A ‘Left Turn’ in Latin America? An Unlikely Comeback in Peru”. *Journal of Democracy* (17): 95-109. DOI: 10.1353/jod.2006.0066

- Meléndez, Carlos. 2019a. “La derecha que se bifurca: Las vertientes populista-conservadora y tecnocrática-liberal en Perú post-2000”. *Colombia Internacional*, (99): 3-27. DOI: 10.7440/colombiaint99.2019.01
- Meléndez, Carlos. 2019b. *El mal menor: Vínculos políticos en el Perú posterior al colapso del sistema de partidos*. Lima: IEP.
- Ministerio de Defensa. 2021. “Frente a la difusión en redes sociales con llamados a la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos netamente electorales o políticos”, Junio 9. <https://twitter.com/MindefPeru/status/1402667413452251136>
- Muñoz, Paula, y Yamile Guibert. 2016. “Perú: el fin del optimismo”. *Revista de Ciencia Política*, 36(1): 313-338. DOI: 10.4067/S0718-090X2016000100014
- Muñoz, Paula. 2019. *Buying Audiences: Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muñoz, Paula. 2021. “Peru’s Democracy in Search of Representation—Divisive Politics and Democratic Dangers in Latin America”. *Divisive Politics and Democratic Dangers in Latin America*, editado por Thomas Carothers y Andreas E. Feldmann. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
- Paredes, Maritza, y Daniel Encinas. 2020. “Perú 2019: Political Crisis and Institutional Outcome”. *Revista de Ciencia Política*, 40(2): 483–510. DOI: 10.4067/S0718-090X2020005000116
- Ponce de León, Zoila, y Luis García Ayala. 2019. “Perú 2018: La precariedad política en tiempos de Lava Jato”. *Revista de Ciencia Política*, 39(2): 341-65. DOI: 10.4067/S0718-090X2019000200341
- Redacción RPP Noticias. 2021. “Congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo: ‘Si tomamos el poder, no lo vamos a dejar’”. *RPP Noticias*, Mayo 18. <https://rpp.pe/politica/elecciones/guillermo-bermejo-si-tomamos-el-poder-no-lo-vamos-a-dejar-noticia-1337383>
- Red Investigativa Regional. 2021. “JEE rechazaron el 100% de las nulidades de Fuerza Popular ingresadas en el plazo de ley”. *Ojo Público*, Junio 13. <https://ojo-publico.com/2811/el-100-de-nulidades-de-fuerza-popular-en-plazo-de-ley-son-rechazadas>
- Romero, César. 2020. “La declaración contra Martín Vizcarra fue un pedido del equipo Lava Jato”. *La República*, Noviembre 23. <https://larepublica.pe/politica/2020/11/22/la-declaracion-contra-martin-vizcarra-fue-un-pedido-del-equipo-lava-jato>

- Salazar Vega, Elizabeth. 2021. "Autoridades electorales y fiscal José Domingo Pérez acosados por simpatizantes de Fuerza Popular". *Ojo Público*, Junio 12. <https://ojo-publico.com/2805/autoridades-electorales-y-fiscal-acosados-por-seguidores-fujimoristas>
- Vergara, Alberto. 2018. "Latin America's Shifting Politics: Virtue, Fortune, and Failure in Peru". *Journal of Democracy*, (29): 65-76. DOI: 10.1353/jod.2018.0063
- Vergara, Alberto, y Daniel Encinas. 2016. "Continuity by Surprise: Explaining Institutional Stability in Contemporary Peru". *Latin American Research Review*, 51(1): 159-180. DOI: 10.1353/lar.2016.0006
- Viguria, Carlos. 2021. "Pedro Castillo convocó a conferencia pero se negó a responder a la prensa". *Perú21*, Junio 15. <https://peru21.pe/politica/elecciones-2021-pedro-castillo-convoco-a-conferencia-pero-se-nego-a-responder-a-la-prensa-pedro-castillo-peru-libre-elecciones-2021-prensa-extranjera-julio-guzman-noticia/>
- Viale, Claudia. 2020. "Peru: Updated Assessment of the Impact of the Coronavirus Pandemic on the Extractive Sector and Resource Governance". <https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/peru-updated-assessment-impact-coronavirus-extractive>
- Weyland, Kurt. 2004. *The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela*. Princeton: Princeton University Press.

[Sobre la autora]

PAULA MUÑOZ

Ph.D. y M.A. en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora Asociada del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas e Investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Es integrante del Comité Directivo de la Red de Economía Política de América Latina (REPAL), miembro del Grupo Sofía, Red de mujeres investigadoras en las ciencias sociales en el Perú y de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Entre enero y marzo del 2019 fue Miembro de la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política”, dependiente de la Presidencia de la República, orientada a proponer las normas orientadas para la implementación de la reforma política.

Cuenta con publicaciones diversas en revistas como *Comparative Politics*, *Revista de Ciencia Política*, *Journal of Democracy*. Su tesis doctoral sobre clientelismo electoral en Perú ha sido publicada recientemente como libro por Cambridge University Press (*Buying Audiences. Clientelism and Electoral Campaigns When Parties are Weak*, Cambridge University Press, 2019).